

Los movimientos sociales y el libre comercio en Am3rica Latina: ¿qu3 hay despu3s del ALCA?

Social movements and free trade in Latin America: what comes after ALCA?

Mercedes Botto

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Universidad de Buenos Aire (UBA)
mbotto@flacso.org.ar

Resumen: Este art3culo examina las experiencias de lucha de las organizaciones sociales en los procesos de liberalizaci3n comercial que han tenido lugar en Am3rica Latina desde comienzos de los a3os noventa del siglo pasado hasta la actualidad. Ha sido un proceso de construcci3n de acci3n colectiva transnacional en el que cada experiencia ha innovado la precedente hasta llegar a constituir una alianza de alcance continental y multisectorial. Sin embargo, este proceso de aprendizaje no ha sido lineal, sino que ha tenido marchas y contramarchas y sus avances han dependido, en gran medida, de la capacidad desplegada por los miembros de estas redes para identificar el capital global como su adversario en el conflicto.

Palabras clave: movimientos sociales, acuerdos de libre comercio, acci3n colectiva, Am3rica Latina

Abstract: This article examines social movements and their experiences of struggle in the processes of trade liberalisation that have taken place in Latin America since the early 1990s to the present day. This has been a construction process of transnational collective action in which each experience has served to innovate the preceding one, until an alliance of continental and multisectoral scope was constituted. However, this learning process has not been linear; instead it has experienced both steps forward and setbacks, and its moments of progress have depended, to a great extent, on the capacity of the members of these networks to identify global capital as their enemy in the conflict.

Key words: social movements, free trade agreements, collective action, Latin America

La autora agradece los valiosos comentarios de Maite Llanos y Lorenzo Fioramonti.

El objetivo de este artículo es analizar las experiencias de lucha de las organizaciones sociales contra los procesos de liberalización comercial que han tenido lugar en el continente americano desde comienzos de los años noventa del siglo pasado. Intentamos demostrar que se trata de un proceso de construcción de alianzas transnacionales en el que cada experiencia ha ido innovando la precedente. Sin embargo, este proceso de aprendizaje no ha sido lineal, sino que ha tenido marchas y contramarchas y sus avances han dependido, en gran medida, de la capacidad desplegada por los miembros de estas redes para identificar el capital global como su adversario en el conflicto. En su recorrido, el artículo caracteriza este proceso de construcción y reconstrucción de redes transnacionales de la sociedad civil, en el marco de las negociaciones gubernamentales que se iniciaron con la creación del Mercado Común del Sur (Mercosur) y que se extienden hasta nuestros días con la Unión de las Naciones Suramericanas (Unasur). Para la mayoría de las organizaciones latinoamericanas, y en especial para el sindicalismo, el Mercosur fue la plataforma para su lanzamiento transnacional. Este aprendizaje se fue ampliando con la experiencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), cuando las organizaciones sindicales empezaron a coordinar sus acciones con otros sectores de la sociedad civil, hasta llegar al Área Libre Comercio de las Américas (ALCA), donde el movimiento encontró su mejor *performance* e impacto, gracias a la combinación estratégica de algunos gobiernos de América Latina, contrarios al proyecto hegemónico de Estados Unidos. Si bien esta combinación de «antiliberalismo» y «antiamericanismo» logró desbarrancar el ALCA, también ha sido el principio de una crisis de identidad interna de estos movimientos antiglobalización, en la que muchas de las organizaciones de la sociedad civil que conformaron esta coalición debaten hoy su apoyo a los procesos de integración subregional liderados por Brasil, como principal potencia económica y política en la región.

Este artículo está dividido en cinco partes. En la primera se analiza la teoría de los movimientos sociales, respecto a otras teorías disponibles, como principal marco conceptual para la acción colectiva transnacional. En las partes sucesivas se inicia el recorrido por los principales procesos de negociación comercial y política que tuvieron lugar en América Latina desde principios de los noventa hasta nuestros días. En cada uno de ellos se identifican los principales conflictos sociales y los actores que los sacaron a la luz, así como las distintas formas que adopta la acción colectiva transnacional y sus potenciales aportes a la construcción de una propuesta alternativa al modelo de globalización presente.

La teoría de la acción colectiva como caja de herramientas

Hay muchas maneras de analizar la acción colectiva y su vínculo con los sistemas políticos, en este caso de alcance regional. Entre los marcos conceptuales disponibles encontramos la teoría de la movilización de recursos, la de la elección racional y la de estructuras de oportunidades. La primera reduce el análisis a cómo los grupos se apoderan de los recursos, los controlan y los canalizan para lograr sus objetivos. La segunda propone analizar la acción colectiva como el resultado del cálculo costo/beneficio que los partícipes (por acción u omisión) hacen de ella. Por último, la teoría de la estructura de oportunidades políticas propone una mirada al entorno, entendiendo que las posibilidades de éxito/fracaso de un movimiento están vinculadas a las oportunidades del entorno político. En este trabajo, recurrimos a las herramientas que nos brinda una cuarta opción: la teoría de la identidad colectiva, también llamada de los movimientos sociales, que focaliza su atención sobre conflictos específicos que dan origen a una nueva identidad social. En efecto, de acuerdo con Touraine (1985), es justamente en situaciones de crisis estructural –como es la del cambio en la estructura del capitalismo postindustrial– cuando emergen los movimientos sociales, definidos como formas de acción colectiva cambiantes y menos institucionalizadas de las formas de acción colectiva hasta ahora conocidas. La identidad de un movimiento social es una construcción social, definida por los propios actores (individuos u organizaciones) que participan en ella y que adopta la forma de significados culturales que dan unidad y solidaridad al sistema de acción (Pizzorno, 1986). Sin embargo, esta construcción no surge de la nada, sino que es el resultado de una inversión organizativa, en la que interactúan objetivos, recursos y obstáculos (Melucci, 2002).

De esta manera, tanto la teoría de la movilización de recursos como la de los movimientos sociales señalan dos elementos clave en toda acción colectiva: el contexto político, que dispone los recursos y obstáculos, y la identidad, que le da especificidad respecto a otras acciones. No obstante, cada una de ellas los define y vincula de manera distinta. Para la teoría de los recursos, la dimensión política es el determinante explicativo de la identidad. En este sentido, la *forma* que adquiera la acción colectiva –formato (huelga, manifestación callejera, cortes de ruta, etc.), nivel de conflictividad y grado de institucionalización– es el resultado del sistema político y de los recursos y oportunidades que este disponga a los actores sociales (Tarrow, 1983). Según la teoría de los movimientos sociales, en cambio, la construcción identitaria de un movimiento no es resultado de una sumisión de un elemento al otro, sino de la interacción entre

ambos; los factores políticos y las identidades sociales individuales previas se fusionan con la realidad presente y con los factores actuales, creando así una nueva identidad. Para esta teoría, la diferencia entre un movimiento social y una protesta social no se apoya en la evidencia empírica o en la retórica, sino en un elemento analítico: la identidad. Una aproximación a los movimientos sociales basada en la identidad y no en los fenómenos empíricos nos permite dar una explicación más satisfactoria sobre los orígenes, las reorientaciones y los alcances que adquieren estos movimientos en el tiempo, aunque complica la comprensión del vínculo que se genera entre la esfera gubernamental y los movimientos sociales en situaciones concretas (Iglesias, 2011: 134).

Si trasladamos este marco conceptual al ámbito internacional veremos que, de la gran cantidad de trabajos que buscan analizar los alcances transformadores del movimiento antiglobalización, una gran mayoría tiende a quedarse en el análisis político e identifica los resultados de la acción colectiva a través de sus rasgos más visibles y mensurables, y pasa por alto la producción de códigos culturales y prácticas innovadoras (O'Brien *et al.*, 2002; Sholte, 2000; Edwards y Gaventa, 2001; entre otros). Apoyados en la relación que mantienen estas organizaciones sociales con las instituciones globales, así como en la capacidad que demuestran para organizarse en redes globales, movilizar amplios sectores de la opinión pública internacional e influir sobre algunas de las políticas de las principales organizaciones financieras internacionales, estos autores reafirman la idea de la presencia de una sociedad civil global que propone un modelo de globalización alternativa construida desde abajo y más democrática que la hasta ahora conocida como globalización económica. Sin embargo, como bien recuerdan algunos teóricos de la acción colectiva (Touraine, 1985; Pizzorno, 1986; Melucci, 2002), para que un orden alternativo sea posible, son necesarias no solo la presencia de un conflicto y de acciones concretas –como fueron las protestas del movimiento antiglobalización en Chiapas (1994), en Seattle (1999) o frente al avance de la ronda de Doha–, sino también formas organizativas que le den unidad, liderazgo y continuidad en el tiempo.

Un segundo grupo más reducido de trabajos tiende a analizar el impacto de las redes y de los realineamientos de la acción colectiva transnacional de manera más analítica (Cox, 1999; Gill, 2002; Grugel, 2005; Armstrong *et al.* 2010; entre otros). Sus autores fijan la atención en la naturaleza del conflicto y en los impactos que tiene sobre la identidad y respuesta del movimiento. Consideran que las innovaciones en materia de participación, fiscalización y transparencia introducidas hasta ahora se vinculan más con las formas que con una propuesta emancipatoria y de desarrollo social y medioambiental sustentable; en este sentido, la democratización del actual orden global sigue siendo un desafío. Si bien este grupo de trabajos se focaliza sobre la construc-

ción identitaria de estos nuevos movimientos transnacionales, no resulta claro el vínculo y contacto que generan con la esfera de lo gubernamental¹. De aquí que lo habitual sea que su acción conflictiva se manifieste bajo la forma de movimientos reivindicativos o de movimientos políticos, con la posibilidad de un mayor o menor componente antagónico en cada uno de ellos. Este trabajo se inscribe dentro de este segundo grupo y asume gran parte de sus premisas, como la de focalizar el análisis sobre un movimiento reivindicativo específico en tiempo y espacio.

El Mercosur y el inicio de la acción colectiva transnacional

Hacia mediados de los años ochenta y comienzos de los noventa, América Latina transitaba por una profunda transformación en su clima político y económico, fruto de dos fenómenos que se dieron de manera más o menos simultánea. El primero fue la recuperación de las democracias y un mayor apego a sus formalidades institucionales; el segundo, un proceso de creciente apertura y transnacionalización de las economías nacionales promovidas por las instituciones económicas internacionales y el paradigma neoliberal en boga a escala global. Este nuevo escenario político y económico también encontró a las organizaciones de la sociedad civil en un proceso de profunda recuperación tras los estragos dejados por las dictaduras militares, que arremetieron contra ellas, en especial contra el movimiento obrero y estudiantil que había logrado desarrollar una gran capacidad de movilización durante la década de los sesenta y setenta. La mayoría de los autores coinciden en caracterizar el escenario como una situación de debilitamiento general de la acción colectiva y un repliegue hacia procesos de individualización de las conductas. Se trata de un proceso complejo en el que se conjugan distintas lógicas. Por una parte, los actores clásicos, como los sindicatos, van perdiendo parte de su significación social y tienden a corporativizarse; por la otra, nuevos actores emergentes

1. Además, como bien señala Melucci (2002), si bien estos movimientos antagónicos o contrahegemónicos construyen su acción colectiva en oposición a un adversario social —en este caso el capital transnacional, a quien disputan la apropiación, control y orientación de los medios de producción social—, nunca se presentan en su estado puro, sino como movimientos políticos con propuestas más pragmáticas.

—movimientos barriales—, constituidos a partir de las nuevas temáticas y derechos cívicos (postautoritarios), no logran constituirse como actores estables (Garretón, 2002). Otros autores hablan de cambios en las formas de acción colectiva; las modalidades más tradicionales tienden a ser reemplazadas por movilizaciones esporádicas, por acciones fragmentarias y defensivas, a veces en forma de redes y entramados sociales significativos pero con baja institucionalización y representación política (Serbin y Fioramonti, 2007: 114).

Con este telón de fondo, las nuevas democracias latinoamericanas inician una carrera hacia la firma de acuerdos de libre comercio. Para los gobiernos, esta apertura al mundo no solo ayudaría a evitar el retroceso en el proceso de privatización y transnacionalización que se venía aplicando a escala doméstica y de manera unilateral, sino que además contribuiría a activar el crecimiento económico en la región a través del comercio y la inversión externa directa (IED). Para la sociedad civil, en cambio, la idea de abrir la economía al mundo generaría en la mayoría de las organizaciones sociales, en especial las sindicales, la resistencia y el temor ante las posibles pérdidas de fuentes de trabajo y de protección normativa por parte del Estado. La percepción de debilidad de estos actores frente al avance imparable del capital transnacional, en condominio con los gobiernos, obligó a estas organizaciones, en palabras de Underhill (2001), a actualizar sus prácticas cotidianas —centradas en agenda, procesos y actores nacionales— para activar nuevas formas de acción colectiva de alcance transnacional (Botto, 2003 y 2004). Sin embargo, la forma que adoptarían estos movimientos fue cambiando con el tiempo, producto no solo del nivel de amenaza percibido en cada una de las negociaciones, sino también de la experiencia acumulada por estas organizaciones.

En el caso del Mercosur, el nivel de amenaza y conflicto fue menor que en el resto de las negociaciones comerciales. La propuesta de los gobiernos de avanzar hacia un mercado común y los lazos de aparente semejanza y hermandad entre sociedades latinoamericanas disiparon la percepción de amenaza. Los costos del proceso de liberalización comercial (intra-Mercosur) no fueron visibilizados por las organizaciones sociales, que prefirieron identificar al Mercosur como un espacio privilegiado de cooperación transnacional, así como de fortalecimiento del movimiento sindical suramericano en la lucha que cada una de estas organizaciones llevaba adelante a escala nacional y en contra de los intentos de sus respectivos gobiernos de flexibilizar —reducir costos laborales— y desregular el mercado laboral. Las primeras organizaciones que buscaron influir en las negociaciones fueron las sindicales, no solo —como hemos visto— por su tradición política, sino porque contaban para hacerlo con una red de alcance transnacional que se llamaba Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS). Hacia 1986 las principales organizaciones

de América Latina², con la ayuda de organizaciones internacionales europeas y norteamericanas –Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres-Organización Regional Interamericana de Trabajadores (CIOSL-ORIT)³–, crean esta red con el objetivo de apoyar y consolidar el Estado de derecho y la vigencia de los derechos humanos en toda la región. Con la llegada del Mercosur, esta red renovó sus votos y la integración regional pasó a constituirse en su principal objetivo.

La meta inicial de esta red de carácter sectorial fue la de incorporar la «dimensión social» en la agenda del Mercosur. La estrategia de la CCSCS fue trabajar con los ministros de Trabajo que, como ellos, tampoco estaban incluidos en la mesa de negociación original ni en la estructura institucional del Mercosur. Esta cooperación se materializó en dos tipos de iniciativas. La primera buscaría democratizar la dinámica decisoria del Mercosur a través de la creación de un canal de participación de la sociedad civil, esto es, el Foro Económico Social (FES), inspirado en la experiencia europea. La segunda intentaría elevar los estándares laborales a través de una carta de trabajo y de un protocolo sociolaboral del Mercosur. La misma estrategia siguieron las organizaciones medioambientales, que presentaron un proyecto de protocolo medioambiental para el Mercosur. Respecto al resto de las organizaciones sociales (mujeres, estudiantes, cooperativas), la capacidad de propuesta ha sido menor y sus avances en el ámbito del Mercosur se han limitado hasta ahora a la conformación de redes regionales y a la apertura de espacios de participación.

La estrategia de carácter propositivo y sectorial llevada adelante por los sectores sociales del Mercosur tuvo resultados ambiguos. Por una parte, logró alcanzar con éxito su deseo de ampliar la agenda regional a temas sociales, así como de incluir a los actores sociales en la discusión de la misma. Sin embargo, esta apertura estuvo fuertemente recortada por un entorno adverso, caracterizado por la resistencia de los gobiernos a validar cualquier iniciativa contraria al inte-

-
2. Inicialmente, esta red estuvo integrada por las organizaciones laborales tradicionales de Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Uruguay y Paraguay, pero más tarde se amplió en número y diversidad, sumando centrales de trabajadores no sindicados y centrales que se adherían a otras confederaciones internacionales.
 3. Si bien durante la Guerra Fría las tres principales corrientes internacionales del sindicalismo tienen presencia en el continente latinoamericano a través de las secretarías y afiliados a la CIOSL-ORIT, la Confederación Mundial del Trabajo-Central Latinoamericana de Trabajadores (CMT-CLAT) y la Federación Sindical Mundial-Congreso Permanente de Unidad Sindical de América Latina (FSM-CPUSTAL), son las dos primeras las que logran consolidar sus vínculos en el tiempo. La CIOSL ha logrado éxitos, particularmente, por la actividad de apertura del sindicalismo socialdemócrata europeo, y la filial ORIT por la hegemonía que la AFL-CIO estadounidense (American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations) ejerce en su organización (Godio y Wachendorfer, 1986).

rés del capital⁴. Esta sobrecarga de demandas no atendidas y/o bloqueadas terminó generando un problema de eficiencia decisoria y de legitimidad política en el Mercosur, y los actores acabaron por buscar espacios alternativos de participación e influencia dentro o fuera del proceso del Mercosur (Botto, 2003 y 2004). Los resultados de la acción colectiva transnacional no solo estuvieron recortados por un entorno adverso (lógica comercial del Mercosur), sino por la dinámica interna que la CCSCS imprimió a la alianza transnacional (al vínculo con sus propios aliados). Si bien la creación de la red significó un quiebre en las tradiciones sectaristas, verticalistas y estadocéntricas⁵ del pasado, a medida que la sensación de amenaza perdió intensidad algunas de estas características volvieron a aparecer. La dinámica que la CCSCS introdujo al FES, como su principal espacio de acción colectiva en el Mercosur, es un claro ejemplo de ello (Ventura *et al.*, 2005). Así, por ejemplo, en el momento de definir a sus potenciales aliados en las distintas batallas a favor de un Mercosur ampliado y no comercial, la CCSCS optó por fortalecer su impronta sectorial y cerrar filas dentro del movimiento sindical, despreciando así el vínculo con otras organizaciones sociales que, aunque con menor nivel de desarrollo y movilización en la región, hubieran podido ampliar su base de representación regional y de propuesta. Esta supremacía sindical en perjuicio del resto de las organizaciones sociales se manifestó desde un comienzo en la distribución de espacio que se otorgó a las ONG. En el estatuto original se les daba, pese a su diversidad, el mismo número de sillas que a los sectores más tradicionales (capital y trabajo).

Algo parecido ocurrió en el propio movimiento sindical. En el momento de decidir qué tipo de organización representaría al movimiento sindical en los debates y en las votaciones del Mercosur, la decisión de la CCSCS fue privilegiar la verti-

-
4. Ejemplo de ello fue el rechazo a los protocolos de trabajo y de medio ambiente que, tras la amenaza de la CCSCS de retirarse del Mercosur, terminaron siendo aprobados solo como mera declaración de principios sin carácter vinculante. La propuesta del FES tuvo mejor suerte: los gobiernos del Mercosur aprobaron la iniciativa porque consideraban positivo que los actores no gubernamentales tuvieran participación en la definición de la agenda «abierta» del Mercosur; sin embargo, no instrumentaron los mecanismos para que estas propuestas llegaran a las instancias de decisión, en manos de los funcionarios de economía y relaciones exteriores.
 5. No obstante, esta afirmación no significa que los sindicatos no participaran de organizaciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), o que no formaran parte de redes regionales y globales como la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT), la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT) a nivel regional, o la Confederación Mundial del Trabajo (CMT) y la Federación Sindical Mundial (FSM) a nivel global, ya que estas redes se remontan a principios de siglo xx. La diferencia con el pasado está en el hecho de que mientras que antes el principal destinatario de la acción colectiva eran los estados, en la actualidad la acción colectiva transnacional se establece en relación con el capital global que es, en definitiva, quien está detrás de estos procesos de liberalización comercial.

calidad sobre la diversidad de voces en la organización. En este sentido, determinó que las únicas organizaciones que participarían en este foro y en las negociaciones regionales serían aquellas de mayor jerarquía, las que representarían a las distintas centrales a escala nacional. Con esta decisión, el movimiento sindical fortalecería, a corto plazo, su capacidad de resistencia político-ideológica al modelo neoliberal que se estaba implementando en el mundo y en cada uno de los países de la región. Sin embargo, a medio y largo plazo, debilitaría su capacidad propositiva en la configuración de la agenda de políticas específicas del Mercosur, donde la presencia de organizaciones subnacionales y por rama de actividad habría podido realizar mayores aportes profesionales y técnicos a la discusión sobre políticas específicas, como fue la discusión de la política de integración productiva entre 2002-2012. Por último, en la relación con su adversario, la CCSCS privilegió la lógica estadocéntrica sobre la lógica regional en su acción colectiva. Aquí el Mercosur introdujo un cambio en la lógica tradicional de los movimientos antiglobalización. En vez de identificar a un enemigo común, que estaría amenazando a todos los países por igual a nivel regional (el capital), la acción colectiva centró el conflicto en el ámbito nacional. La CCSCS buscaba fortalecer la presencia del sindicalismo a nivel nacional para luchar contra los procesos de reforma que se estaban llevando a cabo. En este sentido, el Mercosur se constituyó en un ámbito de construcción y colaboración con el Gobierno —al menos con sectores de este— en la lucha por sus reivindicaciones sectoriales a escala nacional. Sin embargo, esta relación no se mantuvo con el tiempo: a principios del presente siglo, la llegada de nuevos gobiernos desarrollistas en la región puso fin al adversario interno y obligó a la CCSCS a un cambio de estrategia en la que el sentido de su lucha (identidad) se dirigió hacia el ámbito regional, tomando al ALCA como principal adversario.

El TLCAN y la acción colectiva multisectorial

Coincidentemente con la creación del Mercosur, en 1991 comienzan las negociaciones entre Estados Unidos, México y Canadá para la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN [NAFTA, por sus siglas en inglés]). Si bien ambos procesos son ejemplos de regionalismos «abiertos» en oposición a la experiencia europea de los años cincuenta, se trata de acuerdos y de negociaciones bien distintas entre sí (Gratius, 2008). En primer lugar, el TLCAN, a diferencia del Mercosur, proponía un contrato concluido, con reglas claras y acotadas en el tiempo: las partes firmantes se comprometerían a liberalizar su comercio y a desregular sus economías en materia de servicios, inversiones y propiedad intelectual, en un plazo de diez años y bajo un cronograma predefinido. En segundo lugar, se trataba

de un proceso de integración con agenda *cerrada*, en la que ninguna de sus partes ni actores tenía la posibilidad de introducir cambios una vez firmado el acuerdo. Por último, el TLCAN proponía integrar economías con niveles de desarrollo desiguales pero con estructuras productivas que, a diferencia del Mercosur, podían complementarse con cadenas regionales. Por su alcance y las asimetrías entre las partes, este acuerdo daba importantes beneficios a las grandes corporaciones que transferirían sus inversiones a los países con menores costos de producción, en desmedro de la capacidad autónoma de los estados de regular y de la ciudadanía de proteger sus derechos adquiridos. Esto explica por qué el rechazo de la sociedad civil fue inmediato y, a diferencia del Mercosur, la estrategia fue netamente defensiva.

Los primeros en activarse fueron los sindicatos norteamericanos que percibieron en este acuerdo una amenaza a sus fuentes de trabajo y estándares laborales. Para disuadir a su propio Gobierno, recurrieron a los mecanismos tradicionales –como el cabildeo en pasillos y campañas en medios de comunicación–, pero la apatía de la opinión pública les obligó a innovar su estrategia. En primer lugar, ampliaron la incorporación de demandas no gremiales, como el trabajo infantil, las migraciones ilegales y el *dumping* social; y, en segundo lugar, convocaron a nuevas organizaciones sociales a sumarse a su estrategia en contra del avance indiscriminado del capital. De todas las organizaciones contrarias al libre comercio –las de género, pequeños productores, religiosas, de derechos humanos–, los principales aportes a esta nueva forma de acción colectiva multisectorial provinieron del movimiento medioambientalista, que sumó la defensa de un interés público, indivisible y no gremial, a la lucha por la conquista de la opinión pública. También para las organizaciones ambientalistas esta alianza con el sindicalismo era una novedad en su estrategia de influencia política, no tanto por las disputas comerciales en las que ya tenían experiencia, sino porque era la primera vez que se enfrentarían al Gobierno en su lucha contra la apertura indiscriminada a favor del capital.

La construcción de esta alianza multisectorial no fue sencilla; por el contrario, la inclusión de nuevos actores amplió las disidencias que existían en el seno de cada sector (Brunelle, 1999). Entre los temas que se discutieron estaba el del alcance territorial de las alianzas: finalmente primó la decisión de basar la institucionalización de las redes en el ámbito nacional, apelando a la coordinación transnacional tan solo en ocasiones específicas⁶. Las razones que inclinaron la

6. Estas acciones se limitaron a cabildear en foros de negociaciones intergubernamentales y a elaborar un documento común que se llamó «Just and Sustainable Trade and Development Initiative», que fue el resultado del diálogo trinacional entre la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC), la Alliance for Responsible Trade (ART) y la Common Frontiers o Réseau Québécois sur l'Intégration Continentale (RQIC), y que se hizo público en 1993 (Cavanagh *et al.*, 2001).

balanza hacia la estrategia nacional no solo tienen que ver con la dificultad de alcanzar consensos en el interior de una alianza tan heterogénea, sino con las diferencias constitucionales que separaban a los países de la región y las oportunidades y ventanas de cabildeo que cada Gobierno abriría para modificar la letra del acuerdo. De esto se deriva que el objetivo de esta estrategia contra el capital no era romper las reglas del acuerdo, sino más bien modificar la distribución de sus beneficios privilegiando la táctica del cabildeo sobre la de movilización. La única excepción a esta regla fue la asistencia transnacional que se canalizó hacia las organizaciones mexicanas que estaban en franca minusvalía respecto a las del Norte, no solo porque no contaban con recursos y experiencia previa en el tema, sino porque carecían del apoyo de sus centrales sindicales afines al oficialismo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de la opinión pública nacional, que apoyaban la apertura comercial por considerar la única solución posible a las crisis que estaban pasando.

De esta manera, la oposición al TLCAN se construyó a partir de redes nacionales de carácter multisectorial. En México se institucionalizó como Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC); en Estados Unidos, en cambio, se crearon dos redes con objetivos distintos y de aparición consecutiva: la primera, llamada Citizens Trade Campaign estaba destinada a desarrollar una estrategia de cabildeo con los legisladores con el objetivo de evitar el *fast track*; la segunda, la Alliance for Responsible Trade (ART), se propuso elaborar una propuesta alternativa y generar lazos con coaliciones semejantes en otros contextos. Lo mismo ocurrió en Canadá, donde en un comienzo se crearon dos redes –una francófona, Coalition Québécoise sur les Négociations Trilatérales, y otra anglófona, Action Canada Network– que más tarde se unieron en la llamada Common Frontiers o Réseau Québécois sur l'Intégration Continentale (RQIC), para trabajar de manera coordinada tras el duro embate que recibieron con el triunfo electoral del Partido Conservador.

Los resultados de esta estrategia nacional y multisectorial de acción colectiva fueron ambiguos. Si bien por una parte no lograron frenar el acuerdo, objetivo sobre el que tampoco había consenso, la alianza logró persuadir a los gobiernos firmantes sobre la necesidad de proteger los estándares laborales y medioambientales nacionales a través de la inclusión de dos acuerdos adicionales: uno de cooperación medioambiental y otro de cooperación laboral. En términos de ganadores y perdedores, la experiencia del TLCAN enseña que los beneficios de una forma de acción colectiva generaron impactos que se distribuyeron de manera asimétrica dentro de la alianza. En este caso, las principales ganadoras fueron las organizaciones nacionales insertas en sistemas de gobierno que poseen mecanismos institucionales de cabildeo y que disponen de recursos materiales para compensar a los damnificados nacionales. A corto

plazo, las políticas de capacitación y de desempleo aplicadas por el Gobierno de Estados Unidos lograron frenar y/o compensar las pérdidas de trabajos en ese país. A medio y largo plazo, los efectos de las enmiendas se extendieron también a México, lo que elevó los estándares de protección medioambiental y evitó algunos abusos laborales.

El ALCA y la radicalización de la acción transnacional

En 1994 el Gobierno de Estados Unidos propuso a todos los países del hemisferio, con la única excepción de Cuba, alcanzar un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Se trataba del intento de desregulación comercial y financiera más ambicioso hasta entonces conocido, al margen de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En términos de contenidos, se proponía ampliar los alcances del TLCAN a todo el continente y generar un amplio mercado para los negocios e inversiones de las grandes corporaciones del continente que, si bien estaban lideradas en número y tamaño por las norteamericanas, no se limitaban a ellas. En cuanto a los procedimientos, la propuesta de Estados Unidos fue iniciar un proceso de negociaciones gubernamentales, que duró diez años, y en el que, más allá de definir la letra pequeña del contrato, los gobiernos y los sectores productivos afines a la liberalización pudieran cerrar filas en sus propios países y regiones (Botto, 2003 y 2004).

La respuesta transnacional de la sociedad civil tardó dos años en organizarse en forma de red transnacional. La estrategia estuvo liderada por cuatro organizaciones sindicales: la AFL-CIO de Estados Unidos, la Central Única dos Trabalhadores (CUT) de Brasil y las dos centrales canadienses, Canadian Labour Congress (CLC) y Confédération des Syndicats Nationaux (CSN) de Quebec; en 1997 tuvo lugar la III Conferencia Sindical (Foro Laboral) organizada por la CUT en paralelo a la Reunión de Ministros de Comercio en Belo Horizonte. En la construcción de esta alianza hemisférica se tomaron en cuenta las experiencias previas de resistencia: del TLCAN, la necesidad de superar las visiones sectoriales y sumar a nuevos sectores que, como el sindicalismo, se oponían al avance de la globalización; del Mercosur, la importancia de fortalecer los vínculos transnacionales. El resultado fue la Alianza Social Continental (ASC), el movimiento antiglobalización de mayor institucionalización hasta ahora conocido. Esta red estaba compuesta por otras redes organizadas por *capítulos* nacionales y contaba con una secretaría rotativa.

La construcción de este movimiento fue un proceso lento y con cambios importantes en términos de composición, propuestas y alianzas estratégicas. Es posible distinguir dos momentos. En sus comienzos, la composición de esta red tuvo una fuerte presencia de organizaciones del Norte, entre las que abundaban organizaciones sindicales, medioambientales, de derechos humanos, de género e indígenas con experiencia previa en la lucha contra el TLCAN. En cuanto a su propuesta, no estaba a favor de la liberalización indiscriminada del comercio ni tampoco proponía una vuelta al proteccionismo previo a la globalización, sino que postulaba una tercera vía: una globalización regulada por los estados y que ayudara al desarrollo de las economías nacionales (Saguié, 2010). Por último, en cuanto a su estrategia de lucha, la ASC optó al principio por sumarse al reclamo de mayor participación sustantiva y mayor transparencia en el proceso negociador que hacían todas las organizaciones sociales del continente, incluidas las organizaciones *insiders* de la sociedad civil y la Red Empresarial para la Integración Hemisférica (REIH). Durante los años 1997 y 2001, la ASC buscó democratizar el proceso negociador a través de una estrategia dual. Por una parte, participaba en los procesos de consulta abiertos por los gobiernos, y, por la otra, organizaba movilizaciones y foros de discusión paralelos a las cumbres presidenciales que se denominaron «cumbres de los pueblos» (Korzeniewicz y Smith, 2004).

Entre los años 2000 y 2001, la ASC decidió hacer un giro en su forma de acción colectiva e introdujo cambios clave en su dinámica interna y en su relación con el entorno (tanto con sus aliados potenciales como con sus adversarios). Su objetivo ya no era democratizar los procesos de negociación, ampliando la participación y dando transparencia a estos procesos como había hecho hasta entonces, sino frenar el avance del proceso de globalización económica, evitando la firma del acuerdo, visualizado por las organizaciones parte como el intento más acabado de hegemonía económica y política de Estados Unidos en la región. La contundencia que adquiere la acción colectiva a partir de este momento viene dada por la identificación de un claro adversario que une las filas de la nueva coalición social y le da identidad y sentido a la acción colectiva tradicional. Se trata del capital global que avanza en la región y en el mundo, subordinando a su interés el desarrollo de los pueblos y la autonomía política de los estados. Sin embargo, esta disputa por la apropiación del control y orientación de los medios de producción no se manifiesta en estado puro, sino que adopta la forma de una disputa reivindicativa y/o política. En el caso del ALCA, se suma a esta disputa un fuerte contenido antiamericano, que ha venido conectando todos los procesos de integración regional desde el surgimiento de los estados nacionales (Merke, 2011). El ALCA no representa una amenaza al capitalismo, sino una estrategia más de control del continente por parte de Estados Unidos. La idea de antiimperialismo se convirtió en un elemento unificador en la lucha de las distintas organizaciones sociales. Para las organizaciones del Sur, el

antiamericanismo permitía superar las diferencias entre las organizaciones sociales y las campesinas; para las organizaciones del Norte, en especial para los sindicatos de Estados Unidos y de Canadá, el antiamericanismo tampoco generaba mayores obstáculos para el diálogo con sus pares del Sur, ya que las primeras entendían que, sin la presencia de una sólida y unificada presencia de la sociedad civil del Sur, habría sido imposible que la lucha y campaña contra al ALCA alcanzara visibilidad y se sostuviera en el tiempo⁷.

Para muchos estudiosos (Seoane y Taddei; 2001; Saguier, 2007; entre otros) este cambio en las formas de acción colectiva de la ASC (o HSA, por sus siglas en inglés) fue el reflejo de un cambio de época que se manifestó en el escenario regional y global a través de un mayor grado de conflictividad y de protestas masivas en contra de la globalización económica y el neoliberalismo, con movilizaciones de gran visibilidad mediática como Seattle (1999), Porto Alegre (2001) y Doha (2001), entre otras. Desde nuestro punto de vista, este cambio de estrategia en la acción colectiva respondía a un cambio en la composición de la misma alianza. A diferencia de los primeros años de la ASC, caracterizados por la hegemonía de las organizaciones del Norte enfrentadas a los propios gobiernos, hacia el año 2001 se sumó un nuevo grupo de actores sociales del Sur con modalidades de participación, recursos de presión y visiones distintas. Ya no solo se trataría de sumar actores sociales a la alianza, sino también algunos gobiernos de corte *progresista* y desarrollista que se oponían a la hegemonía económica y política de Estados Unidos en el continente. En esta dirección, en el año 2001, se sumaron a la lucha contra el ALCA dos importantes actores sociales: las organizaciones sindicales, congregadas bajo la CCSCS (que hasta ese momento solo focalizaba su estrategia alrededor del Mercosur)⁸, y los movimientos campesinos con fuerte presencia en los países andinos, como la Vía Campesina y el Movimiento Sin Tierra. La activación y la incorporación de

7. En la línea de esta idea, es posible identificar dos posiciones en el movimiento sindical mundial en torno al capital: una es anticapitalista y la otra a favor. Ambas están insertas en la FSM y mantienen instancias de diálogo semejantes a las que se plantean en la ASC. En cuanto al antiamericanismo, existía una fuerte tradición en el sindicalismo cristiano (CLAT) de excluir a los sindicatos de América del Norte en sus redes. Esta tradición, que estaba en gran parte en el sindicalismo latinoamericano, pertenece hoy en día al pasado, tras la unificación de la CLAT y de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) a nivel global en la Federación Sindical Mundial (entrevista a un líder sindical de la Central de Trabajadores de la Argentina [CTA], Buenos Aires, septiembre de 2013).

8. En esta decisión tuvieron un papel clave tres sindicatos de la CCSCS: la Central Única dos Trabalhadores (CUT) de Brasil, el Plenario Intersindical de Trabajadores y Convención Nacional Trabajadores (PIT-CNT) de Uruguay y la CTA de Argentina, que en el marco de la cumbre del Mercosur (Florianópolis, 2000) pujaron por formar parte del movimiento «No al ALCA» (entrevista a un dirigente de la CTA).

organizaciones campesinas al movimiento «No al ALCA» tienen como trasfondo político la llegada a la presidencia de líderes provenientes de estos grupos o que los representan (como Evo Morales en Bolivia y Hugo Chávez en Venezuela).

Estos cambios en la composición y estrategia de la ASC se reflejaron en algunas tácticas innovadoras. En primer lugar, se decidió no participar de la consulta pública –probablemente la más exitosa– abierta en el marco de la Cumbre de Quebec (2001). Por el contrario, la ASC optó por participar en las cumbres desde fuera a través de marchas, protestas callejeras y campañas de opinión pública con *globalifóbicos* y sectores antiglobalización. De la misma manera, la ASC abandonó la estrategia de incidir en las instancias de gobiernos a nivel regional para reforzar su vínculo con las propias bases nacionales. En este sentido, coordinó una campaña de consulta popular sobre el ALCA en los distintos países del hemisferio, cuya implementación sería decidida por cada unidad de coordinación nacional (Berrón y Freire, 2004). Esta estrategia de movilización procuraba abrir el debate público, formar y educar al ciudadano común sobre un tema que parecía ajeno a su cotidianidad, y con ello conformar una masa crítica capaz de presionar a los gobiernos para influir a través de ellos en la mesa de negociación regional. Sin embargo, fiel a su objetivo de asociar en el imaginario colectivo el binomio capitalismo-imperialismo, esta campaña no se limitó al tema comercial, sino que incluyó en el temario otros dos puntos: militarización y deuda externa. Los resultados de esta nueva forma de acción colectiva no tardaron en dar sus frutos a corto plazo. La campaña «No al ALCA» contribuyó a instalar el tema en el debate público y a cerrar filas entre las mismas organizaciones sociales de América Latina, asegurando la organización de puntos focales en la mayoría de los países de la región. Este apoyo y movilización social fueron un aporte insustituible para la decisión de los gobiernos de Argentina, Venezuela y Brasil de desarticular el proyecto del ALCA en la Cumbre de Mar del Plata (2005).

Unasur y la fragmentación de la acción colectiva transnacional

La Cumbre de Mar del Plata (2005) significó el fin de una negociación gubernamental y el inicio de otra nueva para la creación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), lideradas ambas negociaciones por los presidentes de Argentina, Brasil y Venezuela. La negociación concluyó en el año 2008 con la firma de todos los países de América del Sur (Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú, Surinam y Guyana). Se

trataba de una propuesta de integración regional bien distinta a los procesos de integración económica que habían caracterizado la década de los noventa. Sus objetivos eran promover la cooperación en temas de defensa y seguridad; la ayuda monetaria y financiera; la infraestructura regional, así como la cooperación en políticas públicas sociales como la salud y la educación. De esta manera, Unasur se sumaba a un cuadro variopinto de integración regional en el que convivían y se superponían en un mismo espacio y tiempo visiones bien distintas de la integración: algunas de ellas existían previamente a las negociaciones del ALCA y se focalizaban sobre la dimensión económica; otras eran contemporáneas o posteriores al ALCA y proponían una integración política basada en la identidad cultural —es el caso de la Alianza Bolivariana Para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). De entre todas ellas, Unasur recibió una respuesta entusiasta de todos los gobiernos de la región, los cuales rápidamente la identificaron como un paraguas de unidad bajo el cual convivían y se superponían visiones bien distintas y hasta contradictorias de desarrollo económico nacional, sumando nuevos temas a la agenda regional. En efecto, Unasur logró incorporar a países que optaban por una estrategia de economía abierta —como Colombia, Chile y Perú— y que participaban de acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, donde exportaban productos agrícolas a cambio de industrializados, junto con un segundo grupo de países, como los del Mercosur, con economías más cerradas y que buscaban proteger un desarrollo industrial más autónomo. Dentro de este segundo grupo de países, Unasur también logró unir los esfuerzos de figuras como Luiz Inácio *Lula* da Silva y Hugo Chávez, que competían por el liderazgo regional a través de visiones distintas sobre los alcances y las formas de la cooperación regional⁹.

En contraste con los gobiernos, la irrupción de este nuevo escenario regional generó un cimbronazo en las organizaciones sociales. No solo había desaparecido el adversario común —ALCA— que daba sentido y unidad a la lucha, sino que ahora se encontraban frente a gobiernos amigos que interpelaban la idea de integración con proyectos distintos y, en algunos sentidos, hasta antagónicos o contradictorios. Frente a este panorama, la sociedad civil latinoamericana se enfrentaba a tres tipos de dilemas y contradicciones (Berrón, 2013). El primero

9. El Gobierno de Brasil fijaba una posición a favor del sector agroindustrial, la capitalización de Petrobras y la desgravación arancelaria de Venezuela como condición sine qua non para el ingreso en el Mercosur. Venezuela, secundada por Argentina, se mostraba favorable a la creación de cooperativas agrarias, un uso solidario del petróleo de la empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA) y un modelo de integración productiva del Mercosur.

de ellos estaba vinculado a las formas de participación y de acompañamiento a los gobiernos; la tensión se encontraba entre la decisión de continuar insistiendo en las formas tradicionales de participación o pensar en nuevas formas y mecanismos más eficientes. La segunda tensión se vinculaba con los contenidos de la acción colectiva transnacional. En este sentido, las organizaciones de la sociedad civil buscaban descifrar, a la luz de la experiencia pasada, en qué medida estos procesos de integración constituían mecanismos emancipadores y de justicia y equidad social o, en cambio, escondían formas de imperialismo político y de globalización de mercados como el ALCA, solo que en menor escala. En tercer lugar, la sociedad civil se interpelaba a sí misma y a sus aliados potenciales en la estrategia emancipadora, intentando responder sobre cuáles eran las prácticas sociales con mayor capacidad de cambio: las de las organizaciones institucionalizadas y vinculadas al Estado o las de los movimientos sociales espontáneos que anteceden a las formas tradicionales de la política pública.

Frente a esta nueva coyuntura regional, las organizaciones sociales se posicionan de dos maneras diferentes, que a veces se usan de forma contradictoria. La primera posición juzga de manera crítica al Mercosur, puesto que acompaña de manera poco activa los procesos de integración política y cultural, como el ALBA o Unasur. Esta estrategia es asumida mayoritariamente por los movimientos campesinos, los movimientos de base y algunos partidos y sindicatos clasistas, como la fracción crítica de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)¹⁰, que acusan al Mercosur actual de reproducir las lógicas imperialistas y capitalistas del ALCA. La segunda posición, en cambio, señala la importancia de apoyar todos los procesos de integración suramericana y de seguir construyendo alianzas multisectoriales a través de prácticas de acompañamiento y movilización como son las cumbres de los pueblos. De acuerdo con esta posición, liderada mayoritariamente por la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) y el movimiento estudiantil, no hay contradicción entre los objetivos que persiguen el Mercosur y Unasur, sino complementación en términos de agendas y de alcances. Para estas organizaciones, el Mercosur actual –llamado social y productivo– es una alternativa a la integración comercial de los años noventa y sigue teniendo vigencia como opción transformadora para los pueblos, ya que propone un modelo de desarrollo y crecimiento basado en la complementación industrial. Esta decisión de apoyar de manera acrítica a ambas iniciativas gubernamentales condice con el comportamiento seguido por la CUT y la CTA a escala nacional. Ambas organizaciones priorizaron su parti-

10. Entrevista a un dirigente sindical de la CTA, Buenos Aires, julio de 2013.

cipación a escala nacional sobre la internacional. En el ámbito nacional, decidieron apoyar a los gobiernos progresistas de Lula y Kirchner en su confrontación con el neoliberalismo y con la vieja guardia sindical. Este apoyo se materializó en la decisión de mantener un diálogo crítico y evitar la confrontación en todo momento, aun cuando los resultados y la incidencia en la política fueron pequeños (Iglesias, 2011; Dobrusin, 2012). En este sentido, el principal cuestionamiento que hacen los sindicatos a los procesos de integración regional en curso se vincula con el dilema de la participación.

En el ámbito de Unasur, la CSA ha venido bregando por la inclusión de la participación no gubernamental y de mecanismos de transparencia y fiscalización que rompan el hermetismo gubernamental en la toma de decisiones¹¹. En el Mercosur, por otro lado, el desencanto por las formas de participación pasadas ha ido generando propuestas alternativas y diferentes, según el tipo y origen de las organizaciones sindicales. A este respecto, es posible distinguir tres nuevas prácticas (Botto, 2013). La primera propone abandonar la estrategia de confrontación político-ideológica en favor de un diálogo más pragmático con el capital transnacional, que busque mejoras sectoriales a través de una negociación colectiva por empresas y no por sectores, como ha sido hasta ahora¹². La segunda innovación consiste en descentralizar la gestión internacional de algunas centrales, transfiriendo recursos y actividades de formación y capacitación de cuadros hacia las áreas de fronteras y gobiernos subnacionales. Por último, algunos sindicatos nacionales han iniciado actividades de cooperación bilateral hacia los nuevos países de Unasur y de terceras regiones¹³.

11. En términos de participación, las centrales proponen un modelo alternativo al hasta ahora ensayado en el Mercosur, evitando caer en instancias formales y jerárquicas de participación, que favorezca el diálogo intersectorial (entrevista personal con un dirigente de la CUT, Montevideo, septiembre de 2013).

12. Esta propuesta proviene de aquellas centrales con actuación regional, que se vinculan directamente con las empresas que tienen presencia en todos los países del bloque, como son las de servicios (Carrefour, de origen francés), la industria extractiva (ARCELO, de origen indio) o la Industria naval (mixto). En esta estrategia, los gobiernos son convidados de piedra, cuya función es la mayoría de las veces una cuestión formal (entrevista con un dirigente de la Confederación Sindical Internacional-International Trade Union Confederation [CSI-ITUC], Buenos Aires, abril de 2013).

13. En esta nueva estrategia, las centrales nacionales trabajan a veces junto con los gobiernos, como ocurre en el caso de la CUT de Brasil; otras veces, lo hacen de manera aislada y autónoma, como la CTA argentina y el Plenario Intersindical de Trabajadores-Convenión Nacional de Trabajadores del Uruguay (PIT-CNT), apostando más por el vínculo solidario que por una estrategia de desarrollo regional (entrevista a un dirigente de la CTA, Buenos Aires, mayo de 2013).

Conclusiones

Entre los años noventa y principios del nuevo milenio, el continente americano se constituyó en un espacio privilegiado para la articulación de la acción colectiva transnacional. Motivados por la creciente globalización del capital, gobiernos y organizaciones sociales han venido ensayando distintas fórmulas de cooperación de carácter defensivo y alcance transnacional. En el caso de los gobiernos, la solución consistió principalmente en integrar mercados regionales que aseguraran una rebaja de los costos de transacción y una mayor seguridad jurídica. Para los actores sociales, en cambio, la estrategia alcanzó un menor grado de institucionalización y consistió básicamente en resistir y confrontar estos procesos a través de la acción colectiva transnacional.

La primera conclusión a la que se llega tras el recorrido de las distintas experiencias se refiere a las formas de acción colectiva de la sociedad civil. Las modalidades de organización y de protesta no han sido siempre las mismas, sino que varían de acuerdo con el tipo de apertura (alcances y contrato) y las características sociopolíticas del contexto geográfico (*path dependency*). Los contrastes entre el Mercosur y el TLCAN son ilustrativos al respecto. Aun cuando ambas propuestas buscaran la liberalización del comercio, la percepción de amenaza que el Mercosur generó en la sociedad civil fue mucho más baja que la que generó el TLCAN, y la respuesta de estas organizaciones varió en su forma y grado de conflictividad. Así, por ejemplo, en el contexto de la negociación del Mercosur, las organizaciones sociales, principalmente los sindicatos, se organizaron en redes transnacionales que acompañaron la negociación de los gobiernos; mientras que en el TLCAN, la acción colectiva transnacional fue menos institucionalizada aunque más intersectorial y buscó, infructuosamente, frenar la firma del acuerdo.

Una segunda conclusión que arroja la comparación entre los distintos escenarios de negociación regional es que las formas de acción colectiva transnacional –si bien están determinadas por el patrón cultural, como demuestra el apartado anterior– son el resultado de un proceso de acumulación y aprendizaje. La expresión más acabada de estos intercambios fue la creación de la ASC, que se construyó en oposición al ALCA. En gran medida, esta alianza recoge las experiencias de las configuraciones previas: del Mercosur incorpora la idea de institucionalizar esta red para asegurar su continuidad a lo largo del tiempo; del TLCAN, la idea de la multisectorialidad para asegurar una mayor representatividad social. Su composición fue variando con el tiempo y con ella su vínculo con el entorno y su definición del adversario. En un primer momento, primó el patrón de acción de las organizaciones del Norte, caracterizado por una mayor presencia de ONG y con una visión más reivindicativa del conflicto; en un se-

gundo momento, la ASC dio un giro hacia el Sur, hegemonizado por sectores menos estructurados y con una visión más política del conflicto.

Llegamos entonces a nuestro principal interrogante: ¿en qué medida estas redes transnacionales de la sociedad civil, más allá de sus nuevas formas organizativas, contribuyeron a democratizar los procesos de globalización económica en curso, proponiendo un modelo de sociedad contrahegemónica? Para responder a esta pregunta, la experiencia acumulada por la ASC en su lucha contra el ALCA y las dificultades de asegurar su permanencia y profundidad en el tiempo y de cara a las nuevas formas de globalización del capital resultan reveladoras. Si bien es cierto que la ASC logró, como no pudieron las redes contra el TLCAN, alcanzar con éxito su objetivo de evitar la forma del acuerdo de liberalización comercial, también es cierto que la composición e identidad que fue adquiriendo la lucha contra el ALCA significó el inicio de su crisis y fragmentación interna. La decisión de incluir en la alianza a los gobiernos del Mercosur y de incorporar en la confrontación los significantes nacionalistas (antiamericanismo) tuvo efectos positivos a corto plazo porque permitió unificar en la lucha a sectores sociales tan diversos como los movimientos campesinos y los sindicatos; pero a medio y largo plazo terminó por confundir al verdadero adversario de la contienda, que no eran los gobiernos sino el capital global. Esta confusión se materializó en América Latina en el escenario post-ALCA, cuando los gobiernos del Mercosur, bajo el liderazgo de Brasil, propusieron un nuevo esquema de integración dual: continuar con la integración económica a través del Mercosur y ampliar sus alcances a través de la cooperación política (Unasur). Frente a los dilemas sobre si acompañar o no a los gobiernos, y sobre cuándo y cómo hacerlo, las organizaciones sociales se dividen: mientras, por una parte, las centrales sindicales deciden continuar con su acompañamiento y diálogo crítico, por la otra, los movimientos campesinos optan por confrontar un modelo de integración económica que, liderado por las empresas brasileñas, replica a escala regional la globalización económica propuesta por el ALCA.

Referencias bibliográficas

- Amstrong, David; Bello, Valeria; Gilson, Julie y Spini, Debora. *Civil Society and International Governance: The Role of Non-State Actors in the EU, Africa, Asia and the Middle East*. London: Routledge, 2010.
- Berron, Gonzalo. «Viejos y nuevos dilemas para la participación social en los procesos de integración sudamericanos». Paper presentado en el seminario «Building regions from bellow: civil society and governance in time of crisis». Universidad de Pretoria del 20-22 de mayo de 2013.

- Berron, Gonzalo y Freire, Rafael. «Los movimientos sociales del Cono Sur contra el mal llamado libre comercio». *Revista OSAL*, vol. 5, n.º 13 (2004), p. 296-306.
- Botto, Mercedes. «Civil society and regional integration in South America. From MERCOSUR to UNASUR: A step forward?», en: Fioramonti, Lorenzo (ed.). *Regions of Citizens. How Civil Society Reshapes World Regions in Times of Crisis*. New York: Lexington Books, 2013.
- «Los nuevos regionalismos y la acción colectiva transnacional». *Perfiles Latinoamericanos*, vol. 12, n.º 25 (diciembre de 2004).
- «Mitos y realidades de la participación no gubernamental en las negociaciones comerciales», en: Tussie, Diana y Botto, Mercedes. *El ALCA y las cumbres de las Américas ¿una nueva relación público-privada?* Buenos Aires: Biblos/ FLA-CSO, 2003.
- Brunelle, Dorval. «As novas praticas sindicauis frente ao Nafta», en: Challout, Yves y De Almeida, Paulo Roberto (eds.). *Mercosul, NAFTA e ALCA, A dimensão social*. Sao Paulo: Editora LTr, 1999.
- Cavanagh, John; Anderson, Sarah y Hansen-Kuhn, Karen. «Crossborder Organizations Around Alternatives to Free Trade: lessons from the NAFTA/FTAA experiences», en: Edwards, Michael y Gaventa, John. *Global Citizen Action*. Colorado: Lynee Reinner Publisher, 2001.
- Cortina, Rubén; González, Marita; Scassera, Sofía y Robles, Alberto Jose. *La encrucijada global: nuevas Fronteras en la agenda sindical*. Buenos Aires: Prometeo, 2010.
- Cox, Robert W. «Civil society at the turn of the millennium: prospects for an alternative world order». *Review of International Studies*, n.º 25 (1999), p. 3-28.
- Dobrusin, Bruno. «Argentina's labour movement and trade policy: the case of CTA within Mercosur during the Kirchner's government». *Political perspectives*, vol. 6, n.º 2 (2012), p. 58-77.
- Edwards, Michael y Gaventa, John. *Global Citizen Action*. Colorado: Lynee Reinner Publisher, 2001.
- Garretón, Manuel A. «Las transformaciones de la acción colectiva en América Latina». *Revista CEPAL*, n.º 76 (2002).
- Gill, Stephen. «Constitutionalizing inequality and the Clash of globalizations». *International Studies Association*, vol. 4, n.º 3 (2002), p. 47-65.
- Godio, Julio y Wachendorfer, Achim. «Las internacionales sindicales». *Revista Nueva Sociedad*, n.º 83 (mayo-junio de 1986), p. 81-88.
- Gratius, Susanne et al. *Mercosur y Nafta. Instituciones y mecanismos de decisión en procesos de integración asimétricos*. Madrid: Iberoamericana Editorial, 2008, p. 33-95.

- Grugel, Jean. «Democratization and the realm of Politics in International Political Economy», en: Phillips, Nicola (ed.). *Globalizing International Political Economy*. China: Palgrave, 2005.
- Iglesias, Esteban. «Los movimientos sociales bajo el gobiernos de Lula Da Silva: entre la construcción del proyecto político y la institucionalización del diálogo político». *Revista SAAP*, vol. 5, n.º 1 (2011), p. 131-156.
- Keck, Margaret E. y Sikkink, Kathryn. *Activists beyond Borders. Advocacy Networks in International Politics*. Ithaca and London: Cornell University Press, 1998.
- Korzeniewicz, Patricio y Smith, Williams. «Redes transnacionales de la sociedad civil: entre la protesta y la colaboración», en: Tussie, Diana y Botto, Mercedes. *El ALCA y las Cumbres de las Américas; una nueva relación publio-privada?* Buenos Aires: Editorial Biblos, 2004.
- Melucci, Alberto. *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*. Ciudad de México: Ediciones El Colegio de México, 2002.
- Merke, Federico. «De Bolívar a Bush: los usos del regionalismo en América Latina» (versión en español). Paper presentado en seminario Flasco, Argentina, 2011.
- O'Brien, Robert; Goetz, Anne Marie; Scholte, Jan Aart y Williams, Marc. *Contesting global governance*. Cambridge Studies in International Relations. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. Capítulos 1 y 6.
- Paramio, Ludolfo. «Decisión racional y acción colectiva». *Leviatán: Revista de hechos e ideas*, n.º 79 (2000), p. 65-83.
- Pizzorno, Alessandro. «Algún otro tipo de alteridad: una crítica a las teorías de la elección racional». *Sistemas*, n.º 88 (1986), p. 27-42.
- Ruiz, Carlos (coord.). *El proceso de integración sudamericano y elementos para una estrategia sindical*. João Pessoa, Porto Alegre: Confederación Sindical de los Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, 2012.
- Saguié, Marcelo. «Transnational Labour Mobilisation in the Americas: claiming workers rights across borders». *Documento de Trabajo*, n.º 45 (2010). Buenos Aires: FLACSO/RRII.
- «The hemispheric Social Alliance and the Free Trade area of the Americas Process: the challenges and opportunities of transnational Coalitions against Neoliberalism». *Globalizations*, vol. 4 (junio de 2007), p. 251-265.
- Scholte, Jan Aart. «Global Civil Society», en: Woods, Ngaire (comp.). *Political Economy of Globalization*. London: Macmillan Press Ltd., 2000.
- Seoane, Jose y Taddei, Emilio. *Resistencias mundiales (De Seattle a Porto Alegre)*. Buenos Aires: CLACSO, 2001.
- Serbin, Andrés y Fioramonti, Lorenzo. «Civil Society in Latin America: Between Contentious Politics and Participatory Democracy», en: Volkhart Heinrich y Fioramonti, Lorenzo (eds.). *Global Survey of the State of Civil Society*. Bloomfield: Kumarian Press, 2007.

- Tarrow, Sidney G. «Struggling to reform: social movements and Policy change during the Cycles of Protest». *Western Societies Occasional Papers*, n.º 15 (1983). Ithaca Cornell University.
- Touraine, Alain. «An Introduction to the Study of Social Movements». *Social Research*, n.º 52 (1985).
- Tussie, Diana y Botto, Mercedes. *El ALCA y las cumbres de las Américas ¿una nueva relación público-privada?* Buenos Aires: Biblos/ FLACSO, 2003.
- Underhill, Geoffrey. *States, markets and Governance: Private Interests, the Public Good, and the Democratic Process*. Amsterdam: Vossiuspers Uva, 2001.
- Ventura, Deisy *et al.* «Participación de la sociedad civil y gobiernos subnacionales en el MERCOSUR». Informe preparado para la Secretaria Administrativa del Mercosur. Montevideo, Uruguay, 2005.

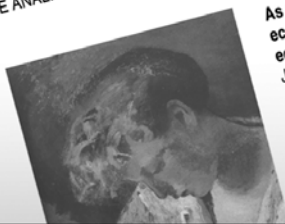
Tempo exterior

REVISTA DE ANÁLISE E ESTUDOS INTERNACIONAIS

Segunda etapa
Vol. XIV (I)
nº 27/Xullo-December 2013
P.V.P. 10 euros
www.igadi.org

Carta aos lectores

A economía de Uruguai
2005-2012: o crecemento
dependente
Roumas



As perspectivas ambientais:
economía ambiental, economía
ecolóxica e decrecentismo
Javier López Prol

As rebelións que abalaran o Brasil
Ricardo Antunes

Cara onde vai o Xapón de Shinzo
Abe?
Masashi Oki
china

Esta revista tiene que estar en todas las bibliotecas

Bichara Khader, Université Catholique de Louvain, Bélgica

Acompaña con acierto el pulso del mundo actual

Patrick O'Sullivan, Bradford University, Reino Unido

Es un rico espacio de diálogo entre sistemas, culturas y valores

Zhu Lun, Academia de Ciencias Sociales, China

Sorprende por la excelente calidad de sus contenidos

Stéphane Paquin, Université du Québec, Canadá

Bien se nota que cree en el valor de la pluralidad de visiones

Robert Mathews, New York University, Estados Unidos

Leo con sumo interés Tempo exterior

Natan Lerner, Tel Aviv University, Israel

SUSCRIPCIONES

AVDA. JOSELÍN 7 P3 4B - 36300 BAIONA (PONTEVEDRA)

Tel. (+0034) 986 357 23

E-mail: info@igadi.org

<http://www.igadi.org/te>

INSTITUTO
GALEGO
DE ANÁLISE
E DOCUMENTACIÓN
INTERNACIONAL



IGADI